Recomendación:	5/2007
Expediente:	CDHDF/122/05/IZTP/D6159.000
Peticionario:	BEATRIZ ELENA GONZÁLEZ REYES.
Agraviada:	JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
Autoridad Responsable:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EDUARDO PARACHE SERNA, JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ROSAS, DAVID GARCÍA REYES Y OSWALDO GODÍNES SÁNCHEZ, POLICÍAS PREVENTIVOS ADSCRITOS AL SECTOR 42 REFORMA IZP-4.
Caso:	ACTOS DE TORTURA INFLIGIDOS AL JOVEN JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN.
Derechos Humanos Violados:	DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.

ING. JOEL ORTEGA CUEVAS
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 2007; visto el estado que guarda el expediente de queja citado al rubro, toda vez que ha concluido la investigación del caso en el que se acreditó violación a derechos humanos, la Primera Visitaduría General formuló el presente proyecto de Recomendación, previamente aprobado por el suscrito, en términos de lo establecido por los artículos 3, 17 fracciones I, II y IV; 24 fracción IV; 46, 47, 48 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como en los artículos 136, 137 y 138 de su Reglamento Interno.

La presente Recomendación se dirige al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal como titular de esa Dependencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 3 y 8 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En términos de lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Interno de la Ley de la Comisión, se procede a dar cumplimiento a los rubros siguientes:

1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS VIOLATORIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

1.1 El 30 de agosto de 2005, esta Comisión recibió la queja de la señora Beatriz Elena González Reyes, en la que refirió que:

El 26 de agosto de 2005 se comunicó a LOCATEL, porque su hijo José Luis Martínez González, de 15 años de edad, no regresó a su domicilio. Posteriormente le informaron que estaba detenido en la Coordinación Territorial IZP-1. En este lugar le explicaron que su hijo estaba señalado como infractor de portación de arma blanca. Posteriormente, en dicha Coordinación lo señalaron como probable responsable del robo de un vehículo.

Ese mismo día su hijo rindió declaración en presencia de persona de su confianza, siendo ésta su propio padre José Luis Martínez Amaro. Su hijo manifestó que él y dos menores de edad (desconoce sus nombres) fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes los subieron con lujo de violencia a una camioneta. Posteriormente fueron llevados a una explanada baldía, ahí los obligaron a desnudarse, los golpearon y les tomaron fotografías desnudos con distintos objetos, además de quemarles las orejas con cigarrillos; finalmente, los trasladaron a la mencionada Coordinación.

Después de rendir declaración su hijo fue trasladado a la Agencia 57° del Ministerio Público, donde le informaron que su hijo sería remitido al Consejo de Menores porque el delito o la infracción que cometió era grave. Actualmente, su hijo y un menor de edad (desconoce su nombre) se encuentran en el Consejo de Menores.

2. PRUEBAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE QUEJA Y DEMUESTRAN LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

2.1 El 1° de septiembre de 2005, el médico de esta Comisión acudió al Centro de Diagnóstico para Varones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde entrevistó y revisó el estado físico de Luis Martínez González, quien al momento de la entrevista presentó las siguientes lesiones:

a) *Excoriación rojiza y oscura, costra seca casi dura, de 0.3 por 0.2 centímetros ligeramente debajo de cola de ceja izquierda (el menor refirió que fue resultado de una patada y que después del golpe tenía hinchada esa zona), opinión médica:*

...esta huella de lesión sí es posible que haya sido producida por patada.

Lo anterior se puede sustentar en que una patada sí es apropiada para causar la lesión descrita; sí hay concordancia de localización entre el lugar anatómico donde dice haber recibido una patada con las partes anatómicas donde se encuentran las huellas de la lesión; sí existe relación temporal entre la producción de la patada con las características que presenta esta huella de lesión en el momento de la examinación.

También señaló que el examinado refirió que días antes del maltrato no había recibido ningún traumatismo, ni había reñido, ni había sufrido algún accidente, por lo que no hay datos objetivos para descartar que la lesión se haya producido como lo narró.

b) Dos excoriaciones y en medio de éstas se observó zona de epidermis y dermis superficial con lesión café rojizo, en forma ovaladas las tres e irregulares, en helix de oreja derecha, de 0.7 por 0.4 centímetros (el agraviado refirió que estas heridas fueron hechas por quemadura de cigarro).

“...Sí corresponden a lesiones producidas por quemadura con cigarro encendido. Lo anterior se puede sustentar en que las quemaduras por cigarro producen una inflamación inmediata que en este caso se observaron primeramente como ampollas y posteriormente como soluciones de continuidad de la piel (heridas). Sí hay concordancia de localización entre el lugar anatómico donde dice haber recibido las quemaduras con la zona anatómica donde se encuentran éstas. Sí existe relación temporal entre la producción del trauma con las características actuales de las lesiones...”

c) Excoriación en forma irregular ovalada de 1.3 por 0.8 centímetros, cubierta con costra muy delgada y seca, en parte superior de hombro derecho (el agraviado refirió que esta lesión le fue producida al jalarlo de la mano).

...esta huella de lesión sí es posible que haya sido producida por alguna fricción de las uñas en su hombro cuando fue jaloneado o bien por una patada. Lo anterior se puede sustentar en que una patada o la fricción producida en la sujeción para jalonear a alguien sí son apropiadas para causar la lesión descrita. Sí hay concordancia de localización entre el lugar anatómico donde dice haber recibido los jaloneos y patadas con las partes anatómicas

donde reencuentra la huella de lesión. Sí existe relación temporal entre la producción de la patada y el jaloneo con las características que presenta esta huella de lesión en el momento de la examinación...

d) Excoriación en forma irregular de 0.9 por 1.5 centímetros por debajo de la axila derecha, color rojizo, las escasas costras son lineales, muy delgadas y secas (el menor no recordó cómo le fueron producidas estas lesiones).

...esta huella de lesión sí es posible que haya sido producida por alguna patada. Lo anterior se puede sustentar en que una patada sí es apropiada para causar la lesión descrita. Sí hay concordancia de localización entre el lugar anatómico donde dice haber recibido las patadas con las partes anatómicas donde se encuentra la huella de lesión. Sí existe relación temporal entre la producción de la patada con las características que presenta esta huella de lesión en el momento de la examinación...

e) Equimosis en la parte superior lateral de cadera derecha, de color verde amarillento, en forma irregular, de 8 por 5.5 centímetros (el menor señaló que probablemente esta lesión se la produjeron mediante puñetazos).

...sí es posible que esta lesión haya sido producida por puñetazos en la misma zona. Lo anterior se puede sustentar en que varios puñetazos sí son apropiados para causar la lesión descrita. Sí hay concordancia de localización entre el lugar anatómico donde dice haber recibido los puñetazos con las partes anatómicas donde se encontraba la huella de lesión en el momento de la examinación...

f) Excoriación dérmica en forma ovalada irregular de 0.9 por 0.7 centímetros en parte posterior lateral de codo derecho, color rojizo. Aunque en su periferia es color rosado, la costra se desprendió por lo que actualmente está en desnivel con respecto al resto de la piel (el menor agraviado señaló que probablemente esta lesión se la produjeron cuando lo tiraron en la camioneta o en el suelo).

...esta huella de lesión sí es posible que se la hayan producido cuando lo derribaron en el suelo o lo aventaron en la camioneta. Lo anterior se puede sustentar en que cuando alguien es derribado o aventado hacia el suelo, de manera instintiva mete las manos para no golpearse la cara o el cuerpo, por lo que tales acciones sí son apropiados para causar la lesión descrita; sí existe relación temporal entre la producción de las caídas o derribamientos con las características que presenta esta huella de lesión en el momento de la examinación...

No hay datos objetivos para descartar que la lesión se haya producido de manera diferente en un evento diferente al narrado...

g) Equimosis en parte superior latero posterior de muslo derecho parte posterior, tercio inferior, de color verde amarillento, en forma ovalada irregular, de 7 por 6 centímetros (el menor agraviado refirió que se la produjeron mediante patadas).

...esta huella de lesión sí es posible que haya sido producida por patada. Lo anterior se puede sustentar en que una patada sí es apropiada para causar la lesión descrita; sí hay concordancia de localización entre el lugar anatómico donde dijo haber recibido una patada con la parte anatómica donde se encuentra la huella de lesión; sí existe relación temporal

entre la producción de la patada con las características que presentan (sic) esta huella de lesión, en el momento de la examinación...

h) Excoriación dermoepidérmica en forma ovalada triangular de 1.5 por 1 centímetros, en parte antero lateral de rodilla derecha, color rosáceo. Aunque en su periferia es color más claro, la costra inicial se desprendió por lo que actualmente está en desnivel con respecto al resto de la piel (el menor agraviado refirió que se la produjeron cuando lo introdujeron en la camioneta y se golpeó en la parte posterior y externa de la camioneta).

...esta huella de lesión sí es posible que haya sido producida como lo refirió el menor agraviado (cuando lo introdujeron en la camioneta se golpeó con la parte posterior y externa de dicha camioneta). Lo anterior se puede sustentar en que un golpe tangencial con la parte posterior y externa de una camioneta sí es apropiado para causar la lesión descrita; sí existe relación temporal entre la producción del trauma con las características que presenta esta huella de lesión en el momento de la examinación...

i) Zona de 5.5 por 3 centímetros, presenta 8 pequeñas excoriaciones, la más grande de 0.8 por 0.6 centímetros, la más pequeña de 0.2 centímetros de diámetro en parte anterior de rodilla izquierda, color café rojizo (el menor agraviado refiere que se las produjeron cuando fue aventado en el interior de la camioneta).

...estas huellas de lesión sí es posible que hayan sido producidas cuando lo aventaron en la camioneta o lo derribaron en el suelo golpeándose la rodilla. Lo anterior se puede sustentar en que cuando alguien es derribado o aventado hacia el suelo u otra parte dura, sí se puede golpear las rodillas, por lo que tales acciones si son apropiadas para causar las lesiones descritas; sí existe relación temporal entre la producción de las caídas o derribamientos con las características que presentan estas huellas de lesión en el momento de la examinación...

2.2. El médico de esta Comisión, constató que en la resolución inicial de la Consejería Unitaria Segunda del Consejo de Menores, sobre el caso de José Luis Martínez González, expedientes 2061/2005-08 y 2062/2005-08, existe una fe de lesiones y un certificado médico del menor, en el que consta *que presentó equimosis y excoriaciones en rodilla izquierda y excoriaciones en rodilla derecha, tres ampollas de 0.5 centímetros en helix del pabellón auricular derecho, lesiones que tardan en sanar menos de 15 días.*

2.3. Asimismo, obtuvo copia del estudio médico psicofísico de 31 de agosto de 2005, emitido por la doctora Lina Martínez Díaz del Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, en el que señaló que José Luis Martínez González presentó *costras hemáticas de 0.5 centímetros de diámetro en el pabellón auricular derecho, una equimosis azulosa de 4 centímetros de diámetro en la rodilla izquierda.*

2.4. Partiendo de las constancias señaladas con antelación así como de las lesiones presentadas por el menor agraviado y la forma en que éste señaló fue agredido, el médico concluyó lo siguiente:

"1. Desde el punto de vista médico, la narración de los hechos de maltrato físico o tortura que me hizo el examinado, fue amplia y coherente.

2. Por las características de las lesiones arriba descritas y por la información médica contenida en los diferentes documentos arriba mencionados, se puede afirmar que es evidente que su mecanismo de producción fue de origen externo, específicamente de tipo

mecánico, excepto las que presenta en la oreja derecha que fueron por quemadura de cigarro, si tienen características de haber sido inflingidas de manera intencional por terceras personas, y son contemporáneas a la fecha en que el examinado afirmó fue maltratado físicamente.

3. Por la narración de los hechos, por las lesiones encontradas, por la sintomatología referida, por el testimonio documentado y por la información de tipo médico encontrado en los documentos anteriormente señalados, se puede afirmar que el menor José Luis Martínez sí fue sujeto a sufrimientos físicos. Que además, cualquier persona considerada promedio hubiera sufrido físicamente si hubiera sido sometida a los maltratos físicos que el menor manifestó haber recibido.

4. Si existe consistencia entre la narración de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que me realizó el examinado, con los síntomas mencionados durante la entrevista clínica por el propio menor José Luis Martínez.

5. De acuerdo a la experiencia que se tiene en esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la narración de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes señalada por el examinado, sí corresponde a las formas de tortura y malos tratos que en ocasiones son practicados por algunos servidores públicos.

6. En este caso, de la narración y de los hallazgos clínicos detectados, se puede señalar que no se aplicaron métodos tendientes a disminuir la capacidad física del examinado sin que le hayan causado dolor o angustia. Ya que los métodos utilizados sí causaron dolor físico en el examinado.

7. De todo lo anteriormente anotado se puede establecer que el cuadro clínico que presentó el examinado sugiere que fue sometido a quemaduras con cigarro, puñetazos, cachazos y tirado al piso, actos que el Protocolo de Estambul [Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes] considera como métodos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

2.5. El 30 de agosto de 2005, el menor José Luis Martínez González fue remitido al Centro de Diagnóstico para Varones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a disposición de la Consejería Unitaria Segunda del Consejo de Menores, relacionado con los expedientes 2061/2005-08 y 2062/05-08; de las constancias que integran dichos expedientes se desprende que:

a) El 26 de agosto de 2005, los policías preventivos Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rosas, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pusieron a disposición del Ministerio Público de la Coordinación Territorial IZP-4, al menor José Luis Martínez González, quien fue detenido con otras dos personas menores de edad, ello porque presuntamente intentaron darse a la fuga cuando observaron a dichos policías y el menor señalado portaba una navaja de muelle.

De manera paralela a esta situación, la señora Maribel Hernández Ruiz, denunciante en la averiguación previa FISZP/IZSP/4/T3/1487/05-07, identificó a uno de los menores detenidos como una de las personas que a un familiar robó un vehículo, en función de esto, se inició contra los menores la averiguación previa FIZP/IZP-4/T3/1750/05-08 por los delitos de robo en pandilla y portación de armas prohibidas.

b) La médico legista Irma Blanca de la Rosa, adscrita a la Agencia Investigadora IZP-4, certificó que el menor José Luis Martínez González presentaba equimosis y excoriaciones en rodilla izquierda y excoriaciones en rodilla derecha y tres ampollas de 0.5 cm. en helix del pabellón auricular derecho.

c) En declaración rendida por el menor José Luis Martínez González ante el Ministerio Público el 27 de agosto de 2005, negó los hechos que se le atribuían y manifestó que caminaba por el Periférico y Eje 5, colonia Leyes de Reforma, en compañía de su amigo Ignacio Anastasio Gil, cuando llegaron unos policías, quienes les apuntaron con un arma y los insultaron. Uno de los policías lo obligó a agacharse y comenzó a golpearlo en la espalda y en las costillas, al tiempo que le decía que no volteara hacia arriba. Después llegó una camioneta con más policías, lo subieron a dicha camioneta y lo llevaron a una explanada, donde comenzaron a tomarle fotografías. Le mostraron una metralleta y le preguntaron de quien era. Él les respondió que no sabía y uno de los policías comenzó a quemarle la oreja derecha con un cigarro, le pegaron en el cuello y en las costillas mientras le volvían a preguntar de quién era la metralleta. Después le mostraron un cuchillo y le ordenaron que lo agarrara sino le iban a quemar las mejillas, por lo que tomó el cuchillo y los policías le tomaron fotografías. También lo obligaron a bajarse el pantalón y el bóxer y los policías así le tomaron fotografías.

2.6. Servidores públicos de la Subdirección Jurídica del Centro de Diagnóstico para Varones de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal informaron a personal de esta Comisión que el 29 de septiembre de 2005, la Consejera Unitaria Segunda del Consejo de Menores, en los expedientes 2061/2005-08 y 2062/2005-08, resolvió dejar en libertad al menor José Luis Martínez González, porque consideró que no era responsable de las infracciones que se le atribuyeron.

2.7. Consta en acta circunstanciada de 8 de noviembre de 2005, que el menor José Luis Martínez González manifestó a personal de esta Comisión lo siguiente:

Iba con su amigo Ignacio por el Periférico, no recuerda el día, pero al parecer fue el 26 de agosto, cuando llegaron dos policías y uno de ellos sacó un arma y les apuntó. Ambos policías estaban vestidos de civil, les apuntó y les dijo ya chingaron a su madre (sic). Él se asustó y retrocedió, en eso llegó el otro policía quien comenzó a pegarle en la espalda y las costillas; lo tiró al piso mientras le decía que no mirara hacia arriba y continuó golpeándolo. Llamaron a una camioneta, era una patrulla de color blanco con azul, pero no vio las placas. Los subieron y los llevaron a una explanada, donde le tomaron fotografías, le dijeron que se bajara el pantalón y el bóxer y le tomaron fotografías de todo el cuerpo. Lo volvieron a agachar mientras le pegaban. Un policía le preguntó que de quién era el arma, pero él le respondió que no sabía y comenzó a quemarle la oreja derecha. Después dejó de golpearlo y sin recordar si era el mismo policía, comenzó a recibir golpes en el cuello. Él respondía que no sabía de qué le hablaban y nuevamente los subieron a la camioneta, posteriormente los llevaron a la delegación.

Él y su amigo Ignacio "N" caminaban sobre la avenida Periférico, ambos venían del domicilio de él y se dirigían a un plantel del CETIS que se encuentra sobre avenida Periférico, por Leyes de Reforma, Delegación Iztapalapa. Eran aproximadamente las nueve de la noche cuando él y su amigo llegaron al plantel del CETIS. Los alumnos ya estaban saliendo y permanecieron en ese lugar sólo unos minutos.

Aunque las personas que los interceptaron iban vestidas de civil, supo que eran policías porque comenzaron a comunicarse por radio. Uno llevaba pants beige con una sudadera

color vino y una gorra. No observó si llevaban alguna placa. No observó dónde llevaban el radio, solamente escuchó que se comunicaban a través de él, pero no recuerda bien lo que decían. Estos policías llegaron caminando. Eran dos policías.

Uno de ellos comenzó a pegarle con una pistola en la espalda y luego en las costillas, lo que provocó que cayera al piso. No recuerda cuántos golpes recibió. Él solamente optó por cubrirse. Cuando comenzó a golpearlo, él intentó cubrirse de los golpes, los cuales provocaron que cayera al piso, donde él continuó cubriéndose de los golpes, ya que el policía continuó golpeándolo en la espalda y en las costillas. En ese momento solamente un policía lo golpeó.

Considera que los otros policías llegaron de inmediato, pero no logró ver cuántos policías más llegaron. Observó que llegaron en una camioneta y dos patrullas más, pero no recuerda el tipo de patrullas que llegaron, solamente observó que la camioneta era blanca. Estos policías, quienes vestían un uniforme de color azul, también lo golpearon aunque no podría precisar cuántos policías lo golpearon y cómo. No recuerda cuántos golpes le dieron pero también lo golpearon en las costillas, la espalda y el cuello porque los tenían en el piso boca abajo. Mientras lo golpeaban le decían que quién era el otro. Él no respondía nada porque lo colocaron boca abajo con las piernas y los brazos abiertos.

Tardaron en llegar a la explanada aproximadamente veinte minutos, pero no recuerda dónde se ubica. Había una barda grande y no recuerda cuánto tiempo estuvieron y cuántos policías había en el lugar.

En ese lugar lo tiraron en el piso y un policía le dijo que se pusiera de pie, que se bajara el pantalón y el bóxer y se subiera la playera. Él obedeció y le tomaron dos fotografías (una de frente y otra de espalda). Los policías volvieron a acostarlo en el piso boca abajo con los pies y las manos abiertas y sintió que un policía se subió en su espalda mientras le preguntaba de quién era el arma. Él respondió que no sabía y el policía le dijo cómo no vas a saber y comenzó a quemarle las orejas. El policía se sentó en su espalda y sintió que le quemó la oreja derecha. Sintió dolor pero no hizo nada. Gritó por el dolor pero no pudo hacer nada para evitar que lo quemara.

Sabe que las quemaduras fueron con un cigarro porque alcanzó a percibir el aroma del cigarro, el cual le colocó en dos ocasiones en la oreja derecha. No le colocó el cigarro en algún otro lado. Después el policía se retiró de su espalda y comenzó a golpearlo en las costillas y en la espalda. No escuchó que los demás policías le dijeron que no lo quemara o que no lo golpeará.

Después volvieron a subirlo en la patrulla y lo llevaron a la 19ª Agencia Investigadora que se ubica en la Delegación Iztapalapa. Durante el trayecto a dicha Agencia le iban pisando la cabeza para que no la levantara, ya que iba acostado boca abajo.

Al llegar a la Agencia lo sentaron en las oficinas. Permaneció en ese lugar aproximadamente treinta minutos, durante los cuales le tomaron sus huellas dactilares y lo llevaron con el médico, el cual lo revisó y le preguntó que si tenía lesiones. Él le dijo que sí, pero no le mostró las lesiones de la oreja porque en el lugar se encontraba uno de los policías observándolo, por lo que sintió temor. Este médico no se encontraba en la 19ª Agencia, ya que los policías nuevamente los subieron a la camioneta y los llevaron con dicho médico. Tardaron aproximadamente cinco minutos en llegar con el médico. Durante el trayecto los policías no le dijeron ni le hicieron nada.

Al regresar a la 19ª Agencia Investigadora los policías le dijeron que se sentara y se agachara. Después le dijeron que levantara el rostro y se percató de que varias personas lo observaban. Posteriormente lo llevaron a los separos donde estuvieron aproximadamente dos días (de viernes a domingo). Mientras permaneció en la Agencia ya no fue víctima de maltrato alguno. En la agencia del Ministerio Público le informaron que lo acusaban de haberse robado un vehículo. Recabaron su declaración en presencia de su padre, a quien nombró como persona de su confianza. Observó que el agente del Ministerio Público anotaba lo que él estaba declarando. No formuló ninguna querrela por las lesiones que le ocasionaron, ya que un abogado que llevó su familia le indicó que se reservara ese derecho.

Después de declarar lo regresaron a los separos y posteriormente los llevaron a la 57ª Agencia Especializada en Asuntos del Menor e Incapaz. En dicha agencia fue revisado por un médico, volvió a rendir su declaración (declaró lo mismo) y no formuló querrela por sus lesiones, pero al declarar mencionó que se las habían ocasionado los policías. Posteriormente lo trasladaron al Consejo de Menores. Recuerda que fue un domingo cuando lo llevaron a la 57ª Agencia, donde solamente permaneció unas horas y después lo llevaron al Consejo de Menores.

No volvió a ver a los policías y no lo han molestado. Desea agregar que cuando estaba en la camioneta, dos policías le dijeron que si quería chance (sic) pero que iba a ser de \$50,000, él les dijo que no y por eso lo llevaron ante el Ministerio Público. No podría identificar a los dos policías que le dijeron esto. Estos hechos no los mencionó cuando rindió su declaración.

2.8. Mediante oficio 1/11623-05 de 8 de noviembre de 2005, esta Comisión solicitó al Director Ejecutivo de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal lo siguiente:

1) Los informes rendidos por separado por los policías preventivos Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rosas, en los que señalen:

a) Si para el desempeño de sus actividades recibieron capacitación de carácter jurídico sobre los casos en los que pueden detener personas, y en especial a menores de edad. En su caso, la fecha o fechas en las que recibieron esa capacitación legal, la unidad administrativa que la brindó y la fecha última en que recibieron o actualizaron esa capacitación;

b) Las actividades que realizan una vez que tienen en su poder presuntos responsables de hechos delictivos, en especial, tratándose de menores de edad, y las que efectúan para hacer respetar y salvaguardar su integridad psicofísica (describirlas con amplitud y claridad);

c) Si han recibido capacitación y adiestramiento de carácter técnico y operativo para el empleo de la fuerza física, el uso de las armas y de otras sustancias u objetos de defensa o ataque; en su caso, la fecha o fechas en las que recibieron esa capacitación, la unidad administrativa que la ofreció y la fecha última en que recibieron o actualizaron ese adiestramiento;

d) La forma en que reportan o informan el resultado de sus actividades (precisar si es por escrito o verbalmente, diaria o periódicamente, etcétera); el área administrativa en la que deben presentar esos reportes y el cargo del servidor público al que los dirigen;

e) La forma en que actúan para decidir emplear y, en su caso, aplicar:

e1) la fuerza física, y

e2) las armas y otras sustancias u objetos de defensa o ataque (describirla con amplitud y claridad);

f) Las actividades que realizan con posterioridad al uso de la fuerza respecto del o los afectados por la aplicación, en especial cuando se trata de menores de edad (describirlas con amplitud y claridad);

g) Si tuvieron que recurrir al empleo de la fuerza para detener al menor José Luis Martínez González (describirlas con amplitud y claridad), y en su caso, el motivo por el que dicho menor se encontraba lesionado cuando lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial IZP-4;

h) Si es el caso, los nombres completos de los demás servidores públicos que hayan participado en la detención del menor José Luis Martínez González;

i) Si es el caso, los nombres completos de los agentes de la Policía Judicial u otros servidores públicos a los que entregaron al menor José Luis Martínez González al ingresarlo en las instalaciones de la Coordinación Territorial aludida;

j) Si es el caso, el área específica donde custodiaron a dicho menor al ingresarlo en las instalaciones de la Coordinación Territorial IZP-4 y, en su caso, los nombres completos de los servidores públicos que apoyaron en la custodia; y

k) Si es el caso, los nombres completos de los servidores públicos de la Coordinación Territorial IZP-4 a los que informaron sobre la detención del menor José Luis Martínez González, así como los demás elementos de información que consideren pertinentes proporcionar para la completa documentación del asunto.

2) Un informe rendido por el superior jerárquico de los elementos de policía Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rosas, en el que se señale:

a) La forma en que los policías preventivos a su dirección o mando rinden informes, reportes o partes de novedades sobre las actividades que desempeñan y, además, la manera en que esos informes o reportes se resguardan;

b) Si dichos policías a su mando reportaron que detuvieron al menor José Luis Martínez González. Si así fue:

b1) La forma en que se rindieron esos informes (precisar si es por escrito o verbalmente, diaria o periódicamente, etcétera);

b2) Si en los informes que rindieron señalaron si emplearon la fuerza en la detención;

b3) En su caso, si reportaron los motivos por los que decidieron emplear la fuerza;

b4) En su caso si reportaron que, con motivo del empleo de la fuerza hicieron uso de partes de su cuerpo, armas u objetos de otra índole; y

b5) En su caso, si informaron que gestionaron que se brindara atención médica al afectado por el uso de la fuerza;

3) Copia certificada, completa y legible de:

a) Los informes, reportes, partes de novedades y demás documentos que hayan rendido los policías Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rosas, respecto de la detención del menor José Luis Martínez González;

b) Los registros asentados el 26 de agosto del año en curso en la bitácora de base de radio del Sector de Policía al que pertenecen los policías que participaron en la detención en cuestión, y

c) Los registros asentados el mismo 26 de agosto del año en curso en la bitácora de Sector Central de la Dirección Ejecutiva de Comunicaciones de esa Secretaría de Seguridad Pública.

2.9. Por oficio 1/11624-05 de 8 de noviembre de 2005, esta Comisión solicitó al Director General de Derechos Humanos de la Procuraduría Capitalina, lo siguiente:

1) Un informe escrito rendido por los agentes del Ministerio Público de la Coordinación Territorial IZP-4 que intervinieron en la integración de la averiguación previa IZP-4/T3/1750/05-08, y en especial, el que recibió al menor detenido José Luis Martínez González, en el que señale:

a) Las actividades de vigilancia o supervisión que se llevaron a cabo para asegurar la integridad psicofísica del menor detenido José Luis Martínez González;

b) Las actividades que se realizaron cuando quedó debidamente acreditada la minoría de edad de José Luis Martínez González, quien fue puesto a su disposición, y en su caso, el trato que brindaron a dicho menor;

c) Las acciones legales que se llevan a cabo cuando un menor de edad que tiene la calidad de probable responsable se encuentra a su disposición, y las acciones legales y/o administrativas que en su caso realizan cuando consideran que es necesaria o urgente recabar la declaración del menor detenido (en calidad de probable responsable) para continuar o perfeccionar la investigación de hechos presuntamente delictivos;

d) Si se verificó si el menor José Luis Martínez González presentaba alguna lesión. En su caso, las actividades que se llevaron a cabo para conocer el origen de las lesiones, si un médico legista las certificó, si se le brindó algún tipo de atención médica, y si se inició alguna investigación para ubicar al o los responsables del origen de las mismas, y

e) Si el menor José Luis Martínez González formuló alguna denuncia o querrela por las lesiones que presentaba, y en su caso, el trámite que se dio a dicha denuncia.

2) Un informe escrito rendido por el Responsable de la 57ª Agencia Investigadora Especializada en Asuntos del Menor e Incapaz, en el que se precise lo siguiente:

a) El registro de la averiguación previa que, en su caso, se inició con motivo de la remisión del menor José Luis Martínez González;

b) Si se verificó si el menor José Luis Martínez González presentaba alguna lesión. En su caso, las actividades que se llevaron a cabo para conocer el origen de las lesiones, si un médico legista las certificó, y si se inició alguna investigación para ubicar al o los responsables del origen de las mismas;

c) En caso de que se haya iniciado alguna investigación por las lesiones que presentaba el menor José Luis Martínez González, el programa y desarrollo de investigación que el agente del Ministerio Público a cargo de dicha investigación haya elaborado;

3) Copia certificada, completa y legible de:

a) La averiguación previa IZP-4/T3/1750/05-08 que se inició contra el menor José Luis Martínez González, y de las actuaciones que en su caso se hallan realizado para conocer el origen de las lesiones que presentaba dicho menor;

b) Los certificados médicos que se elaboraron con motivo de la puesta a disposición del menor José Luis Martínez González, de su remisión a la 57ª Agencia Investigadora del Ministerio Público, y de la determinación de remitirlo al Consejero en turno de la Dirección de comisionados de menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

2.10. Por oficios DEDH/8203/2005 y DEDH/1988/2006, de 21 de noviembre de 2005 y 7 de marzo de 2006 respectivamente, el Director Ejecutivo de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal nos envió copia de la siguiente documentación:

a) La bitácora de la base de radio de 26 de agosto de 2005 relacionada con la detención de José Luis Martínez González, en la que se anotó que:

A las 23:17 horas, la unidad IZP44180, tripulada por los policías Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rosas, reportan hechos que ocurrieron a las 21:20 horas en 3 de junio y Batalla Calpulalpan, colonia Leyes de Reforma 3ª Sección, Delegación Iztapalapa, donde fueron detenidas tres personas, entre ellos el menor agraviado José Luis Martínez González, de 15 años de edad. Los detenidos portaban un arma de fuego suametralladora marca Winchester calibre 22 con cache de madera de 40 centímetros con 23 cartuchos útiles y un cuchillo cebollero de aproximadamente 20 centímetros. Fueron detectados en operativo pasajero seguro. Fueron remitidos a la 19ª Agencia Investigadora, donde se inició la averiguación previa IZP-4T3/1750/05-08.

b) El oficio IZP-4/377/06, de 3 de marzo de 2006, en el que el Primer Inspector Luis Enrique García Arellano, Director de la U.P.S. 42 Reforma IZP-4, informó que:

Los elementos adscritos a esa área sectorial después de haber tomado conocimiento de un hecho relevante, tienen la instrucción precisa de informar a sus mandos inmediatos por la frecuencia de radio y por escrito de los hechos que hayan tomado conocimiento.

Desconoce si los policías reportaron la detención del menor José Luis Martínez González, ya que cuando ocurrieron los hechos él era Director de la Unidad de Policía Sectorial IZP-3 Abasto, por lo que solamente tiene conocimiento de los documentos que están en el archivo de esa área, como el parte informativo de 27 de agosto de 2005 que rindieron los policías que detuvieron al menor aludido. Todo el personal operativo tiene la obligación de pasar a los detenidos al servicio médico legista para ponerlos a disposición de la autoridad competente.

c) Dos partes informativos en los que no se aprecian datos de identificación de la o las personas que los elaboraron, pero se aprecia la fecha de 23 de noviembre de 2005. En dichos documentos se señaló lo siguiente:

El 27 de agosto de 2005, aproximadamente a las 21:20 horas, al realizar el patrullaje a bordo de la unidad IZP 4 4180 tripulada por los policías 741232 Parache Serna Eduardo, 739615 José Luis Fernández Rosas, 818875 David García Reyes y 818163 Oswaldo Godínez Sánchez, en convoy con la unidad IZP 4 4145, circulaban por la calle Batalla de Calpulalpan casi esquina con 3 de Junio de 1980, colonia Leyes de Reforma 3ª Sección, se percataron que cinco sujetos al notar la presencia de las patrulla, comienzan a correr, por lo que se inició la persecución pie a tierra de esas personas, logrando la detención de 3 de ellas de nombres Ignacio Anastasio Gil, a quien se le encontró entre sus ropas una sub ametralladora calibre 22 con 23 cartuchos útiles; José Luis Martínez González, de 15 años de edad, a quien entre sus ropas se le encontró una navaja de muelle, y Alfredo Cocino García, a quien se le encontró un cuchillo casero, por lo que los trasladaron a la 19ª Agencia del Ministerio Público.

Posteriormente se realizó una investigación por el robo de un vehículo ocurrido el 27 de julio de 2005, por lo que los tripulantes de la patrulla IZP 4 4145 se trasladó al domicilio de la parte afectada y al llegar a la agencia del Ministerio Público aludida, la señorita Graciela Carrasco Medel reconoció plenamente a Ignacio Anastasio Gil como la persona que la despojó de su vehículo.

d) Un informe suscrito por el policía José Luis Fernández Rosas, en el que señaló que:

Cuando ingresó a la policía el 1 de mayo de 1992 recibió capacitación; sin embargo, para la detención, control y aseguramiento de menores infractores (sic) no ha recibido capacitación y adiestramiento.

Teniendo a los presuntos responsables de hechos delictivos, inmediatamente los presentan ante el Ministerio Público, informando al mando y base de la detención, ignorando si son menores de edad porque se niegan a dar informes.

Cuando ingresó a la Academia de Policía, en mayo de 1992, lo instruyeron en aplicar la legalidad, proporcionalidad y estricta necesidad, siempre que lo acredite el buen desempeño de su trabajo.

El resultado de sus actividades se informa por escrito dejando un parte de novedades y la puesta a disposición al mando inmediato superior, quedándose con una copia de recibido.

La forma que actúan para decidir emplear la fuerza física, las armas y otras sustancias u objetos de defensa o ataque es la legal, la necesaria y proporcional.

Después de realizar el uso de la fuerza, los afectados por esa aplicación son puestos a disposición de manera inmediata después de la detención y la presentación, dadas las circunstancias que sean necesarias en los momentos de la detención se ignora si son menores de edad.

Al perseguir a los detenidos (entre ellos el menor José Luis Martínez González) se efectuó una detención limpia (de contacto físico, siendo ellos cooperativos ya que los cuatro elementos que precedieron al aseguramiento iniciando con el cacheo preventivo de pie).

Los servidores públicos que participaron en la detención del menor José Luis Martínez González fueron los policías José Luis Fernández Rosas, Eduardo Parache Serna, David García Reyes y Oswaldo Godínes Sánchez. Estos mismos policías custodiaron al menor y a los otros detenidos en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público aludida.

e) Un informe suscrito por el policía Eduardo Parache Serna, en el que señaló que:

Sí recibió capacitación cuando ingresó a la Academia de Policía en noviembre de 1992, haciendo hincapié que para la detención, control y aseguramiento de menores infractores no ha recibido capacitación y adiestramiento.

Teniendo a los presuntos responsables de hechos delictivos, los presentan inmediatamente al Ministerio Público, informando al mando y base de la detención e ignorando si son menores porque se niegan a dar informes.

Cuando ingresó a la Academia de Policía, en noviembre de 1992, lo instruyeron en aplicar la legalidad, proporcionalidad y estricta necesidad, siempre que lo acredite el buen desempeño de su trabajo.

El resultado de sus actividades se informa por escrito dejando un parte de novedades y la puesta a disposición al mando inmediato superior, quedándose con una copia de recibido.

La forma que actúan para decidir emplear la fuerza física, las armas y otras sustancias u objetos de defensa o ataque es la legal, la necesaria y proporcional.

Después de realizar el uso de la fuerza, los afectados por esa aplicación son puestos a disposición de manera inmediata después de la detención y la presentación, dadas las circunstancias que sean necesarias en los momentos de la detención se ignora si son menores de edad.

Al perseguir a los detenidos (entre ellos el menor José Luis Martínez González) se efectuó una detención limpia (de contacto físico, siendo ellos cooperativos ya que los

cuatro elementos que precedieron al aseguramiento iniciando con el cacheo preventivo de pie).

Los servidores públicos que participaron en la detención del menor José Luis Martínez González fueron los policías José Luis Fernández Rosas, Eduardo Parache Serna, David García Reyes y Oswaldo Godínes Sánchez. Estos mismos policías custodiaron al menor y a los otros detenidos en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público aludida.

2.11. Mediante oficio DGDH/DEB/503/10008/11-05, sin fecha, recibido en esta Comisión el 1 de diciembre de 2005, el Director General de Derechos Humanos de la Procuraduría capitalina, nos envió copia de la siguiente documentación:

a) Informe, de 21 de noviembre de 2005, suscrito por la licenciada Adriana Herrera García, agente del Ministerio Público del Segundo Turno de la Unidad de Investigación con detenido de la 57ª Agencia Investigadora del Ministerio Público, y el señor Víctor Manuel García Celis, oficial secretario de dicha unidad de investigación, en el que señalaron que:

“Que siendo las 15:30 horas del día 28 de mayo (sic) de 2005, los suscritos, radicamos la indagatoria en comento (FIZP/IZP-4/T3/1750/05-08), toda vez que fue remitida a esta 57 Agencia por el personal de la Coordinación Territorial IZP-4 de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, junto con los menores probables infractores José Luis Martínez González, Ignacio Anastasio Gil y Alfredo Cocino García... el menor José Luis Martínez González presenta: flictemas por quemadura en pabellón auricular derecho, excoriación dérmica en la región deltoidea derecha, equimosis verdosa en región de cresta iliaca derecha, y excoriaciones con costra hemática en codo derecho y ambas rodillas... dicho menor rindió su declaración... en presencia de su señor padre José Luis Martínez Amaro, en la cual se reservó su derecho a formular denuncia en contra de los policías que lo detuvieron y que lo pusieron a disposición, quienes señala que le ocasionaron las lesiones que presenta... se realizó el acuerdo de remisión de los menores José Luis e Ignacio al C. Comisionado en turno de la Dirección de Comisionados de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que en la esfera de sus atribuciones determine su situación jurídica...”

b) Informe, de 21 de noviembre de 2005, suscrito por el licenciado José Remedios López Mota, agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido de la 57ª Agencia Investigadora, y el señor José Luis Cruz Miranda, oficial secretario de dicha Unidad de Investigación, en el que señalaron que:

“...por cuanto hace a las lesiones presentadas por el menor motivo de la queja y que le fueron ocasionadas por los policías remitentes, se realizó un desglose a la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos...”

c) Un informe, de 24 de noviembre de 2005, suscrito por el licenciado Armando Sumano Muñoz, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 3 Con Detenido de la Coordinación Territorial IZP-4, en el que señaló que:

“...con fecha 27 de agosto del año en curso, siendo las 01:12 horas se dio inicio a la averiguación previa IZP-4T3/1750/05-08 por el delito de aportación (sic) de arma prohibida y robo a transeúnte con violencia, en donde policías preventivos pusieron a

disposición a tres menores, de nombres José Luis Martínez González, de 15 años de edad... se le encontró portando una navaja de muelle... esto indicado por los policías preventivos Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rojas, quienes formularon denuncia contra los menores ya citados.

...

Se presentó en el interior de estas oficinas la C. Maribel Hernández Ruiz, quien en calidad de testigos (sic) de los hechos manifestó reconocer al menor... José Luis Martínez González como uno de los sujetos que el día 27 de julio del presente año, siendo aproximadamente las 21:00 horas, había desahogado a su cuñada... Griselda Carrasco Medel del vehículo... por lo que realiza formal denuncia por el delito de robo... para asegurar la integridad psicofísica de los menores detenidos. Al momento de ser presentados en estas oficinas, fueron pasados de inmediato al servicio médico, a fin de ser valorados en su integridad física... la atención a los menores infractores es la misma en todos los casos.

...

El médico legista de guardia doctor José Luis Altamirano Olivares, certificó que José Luis Martínez González contaba con lesiones de las previstas y sancionadas por el artículo 130 fracción (sic) del Código Penal vigente para el Distrito Federal... José Luis Martínez González, se reservó su derecho a presentar denuncia alguna en contra de los policías que lo detuvieron y pusieron a disposición de esta representación social...".

d) La averiguación previa IZP-4T3/1750/05-08, en la que consta que:

d.1. El 27 de agosto de 2005, a las 01:12 horas, los policías preventivos Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rosas, adscritos al Sector 42 Reforma, pusieron a disposición del agente del Ministerio Público del tercer turno de la Unidad de Investigación 3 de la Agencia Investigadora IZP-4, a los menores de edad José Luis Martínez González, Ignacio Anastasio Gil y Alfredo Cocino García, como probables responsables de las infracciones de: portación, fabricación, copia e importación de objetos aptos para agredir, portación de arma prohibida, robo y robo a transeúnte con violencia; dando inicio a la indagatoria correspondiente.

d.2. El 27 de agosto de 2005, los policías preventivos Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rosas declararon a las 01:56 y 02:19 horas respectivamente, que:

Prestan sus servicios como policías preventivos. Son compañeros y ambos tienen asignada la patrulla IZP-4-4180. El 26 de agosto del año en curso, aproximadamente a las 21:30 horas, se encontraban realizando labores propias de la policía preventiva y en convoy con la patrulla IZP-4-4145. Al circular por la calle de Batalla de Calpulalpan, casi esquina con 3 de Julio de 1860, colonia Leyes de Reforma, 3ª. Sección, se percataron de la presencia de 5 personas desconocidas, quienes al ver la presencia de las patrullas, comenzaron a correr para darse a la fuga. Esa conducta les pareció sospechosa, por lo que procedieron a realizar una persecución pie a tierra.

Lograron asegurar a tres de esas personas, quienes se llaman Ignacio Anastasio Gil de 16 años de edad, a quien se le encontró debajo de sus ropas una subametralladora; Alfredo Cocino García, de 17 años de edad, a quien se le encontró un cuchillo de uso doméstico, y José Luis Martínez González, de 15 años de edad, a quien se le encontró en la bolsa del pantalón una navaja de muelle.

Se procedió a su aseguramiento así como a la localización de posibles denunciantes, contactando a la señora Maribel Hernández Ruiz, a quien en días pasados le robaron un

vehículo. Esta persona al tener a la vista a los tres detenidos, reconoció plenamente al menor Ignacio Anastasio Gil, como uno de los dos sujetos que el 27 de julio de 2005 le robaron a su familiar Griselda Carrasco Medel un vehículo, iniciándose por esos hechos la averiguación previa FIZP/IZP-4/T3/1487/05-07.

d.3. El 27 de agosto de 2005 a las 01:15 horas, la señora Maribel Hernández Ruiz, en calidad de testigo de los hechos, declaró que:

El 27 de julio de 2005, aproximadamente a las 21:00 horas, se encontraba en su domicilio, cuando escuchó que tocaban un claxon, se asomó por la ventana y observó que era su cuñada Griselda Carrasco Medel, a bordo de su vehículo con placas de circulación 140-LZW. Al salir, observó que se acercaron dos personas, uno de ellos era quien ahora sabe responde al nombre de José Luis Martínez González, quien se paró del lado derecho del vehículo, quien se ofreció para bajar a los niños del vehículo. Ella se opuso porque esta persona no tiene ninguna relación con ellos.

Se percató de que el menor José Luis Martínez González portaba un arma de fuego. Observó que su cuñada se bajó del vehículo, porque la otra persona también estaba armada y le estaba apuntando. Ambos asaltantes abordaron el vehículo y se fueron con rumbo desconocido.

Ese mismo día, su cuñada Griselda Carrasco Medel denunció los hechos, iniciándose la averiguación previa IZP-4T3/1487/05-07.

d.4. El 27 de agosto de 2005, a las 03:00 horas, el médico legista adscrito a la Coordinación IZP-2, doctor José Luis Altamirano Olivares, certificó que el menor José Luis Martínez González presentaba las siguientes lesiones:

...Equimosis roja en pabellón auricular derecho, equimosis rojiza de 1 centímetro en región escapular derecho, de 2 centímetros en hombro derecho, de 2 centímetros en axila derecha de 4 por 4 centímetros en pared lateral derecha de abdomen, puntiformes en cara anterior ambas rodillas, excoriaciones de 1.5 y 3 centímetros en cara posterior de antebrazo derecho, múltiples lineales en cara posterior de antebrazo izquierdo, múltiples puntiformes en cara anterior ambas rodillas. Lesiones que tardan en sanar menos de 15 días...

d.5. A las 10:45 horas del 27 de agosto de 2005, el agente del Ministerio Público hizo saber sus derechos al agraviado José Luis Martínez González, y éste asentó que dicho menor se comunicó con su tío Marco Antonio Martínez Amaro, a quien informó dónde se encontraba detenido.

d.6. La señora Griselda Carrasco Medel, en su calidad de denunciante declaró que:

El 27 de junio (sic) de 2005 le robaron su vehículo con placas de circulación 140LZW, por lo que denunció los hechos y se inició la averiguación previa FIZP/IZP-4T3/1487/05-07.

El 26 de agosto de 2005 por la noche, sin recordar la hora exacta, su hermano Marcos le llamó por teléfono y le dijo que era necesario que se presentara a la Agencia Investigadora IZP-4, ya que habían detenido a unos jóvenes y era necesario que los observara para ver si alguno de ellos le había robado su vehículo.

Al tener a la vista a dichos jóvenes, reconoció plenamente y sin temor a equivocarse a José Luis Martínez González como el mismo que se acercó a su cuñada Maribel y se ofreció a ayudarlo a bajar a los niños del vehículo para después mostrarle un arma de fuego que llevaba en la cintura, y que junto con otra persona les apuntó con el arma, abordaron el vehículo y se lo robaron. A los otros dos detenidos no los reconoció.

Formuló denuncia contra José Luis Martínez González, y contra quien resulte responsable, por el delito de robo.

d.7. El menor José Luis Martínez González, en presencia de su padre José Luis Martínez Amaro, a quien nombró como persona de su confianza, señaló que los hechos que le atribuían eran falsos, y manifestó que:

El 27 de julio de 2005, a las 09:00 horas, se fue con su padre a vender ropa al tianguis que se encuentra en Cárcel de Mujeres. Ambos regresaron a su domicilio aproximadamente a las 19:00 horas. Aproximadamente a las 20:00 horas salió de su domicilio en compañía de sus padres y de sus hermanos, y se dirigieron al salón de baile Academia, el cual se ubica en la calle 47 y avenida 8, colonia Moctezuma, Delegación Venustiano Carranza, donde estuvo ensayando los bailes para la fiesta de 15 años de su prima Gabriela Santos Amaro.

Los ensayos concluyeron aproximadamente a las 21:30 horas. Él y su familia regresaron a su domicilio aproximadamente a las 22:00 horas.

Respecto de lo que ocurrió el 26 de agosto de 2005, es falso lo que declararon los policías preventivos, ya que él caminaba por el Periférico y la avenida 5, colonia Leyes de Reforma, en compañía de Ignacio, de quien ignora sus apellidos, cuando llegaron unos policías, quienes les apuntaron con sus armas de fuego mientras les dijeron chingaron a su madre. Uno de los policías lo agachó y comenzó a golpearlo en la espalda y en las costillas, al tiempo que le decía que no volteara hacia arriba.

Después llegó una camioneta de policías de color azul y blanco, sin que lograra ver el número. A él y a Ignacio los subieron a dicho vehículo y los llevaron a una explanada, pero no sabe dónde se localiza. En dicha explanada comenzaron a tomarles fotografías. Les mostraron una metralleta y les preguntaron que de quién era. Él respondió que no sabía de quién era y uno de los policías comenzó a quemarle la oreja derecha mientras le pegaban en el cuello y las costillas.

Le volvieron a preguntar que de quién era la metralleta y volvió a responder que no sabía. Después le mostraron un cuchillo y le dijeron que lo sujetara o de lo contrario lo iban a quemar en las mejillas. Por esa razón él tomó el cuchillo y los policías le tomaron unas fotografías.

Los policías también lo obligaron a bajarse el pantalón y el bóxer, y los policías le tomaron fotografías de sus genitales y de sus glúteos. Después los volvieron a subir a la camioneta y los llevaron a la agencia del Ministerio Público, donde llegaron otros policías con un joven, al que no conoce.

Se reservó su derecho a formular alguna denuncia contra los policías que lo detuvieron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

d.8. Al terminar de declarar, el agente del Ministerio Público dio fe de que a las 21:20 horas, el menor José Luis Martínez González presentaba equimosis y excoriaciones en rodilla izquierda, excoriaciones en rodilla derecha, tres ampollas de 0.5 cm. en hélix del pabellón auricular derecho.

d.9. El 28 de agosto de 2005, a las 12:59 horas, el agente del Ministerio Público acordó remitir la averiguación previa y a los detenidos, entre ellos al menor José Luis Martínez González, a la 57ª Agencia Especializada en Asuntos del Menor e Incapaz para que se resolviera su situación jurídica, y enviar un desglose a la Unidad de Investigación Sin Detenido en la Coordinación Territorial IZP-4, por lo que hace a otros ilícitos y a otros probables responsables, y

d.10. El 25 de octubre de 2005, el agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora 2 Sin Detenido de la Coordinación Territorial IZP-4, propuso el no ejercicio de la acción penal temporal en el desglose de la averiguación previa FIZP/IZP-4T3/1750/05-08, porque de las intervenciones que se solicitaron a agentes de la Policía Judicial, no se encontraron elementos que ayudaran a determinar la identidad del o los otros probables responsables.

2.12. Por oficio DGDH/DEB/503/10292/12-05 de 9 de diciembre de 2005, el Director General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, envió a esta Comisión un informe del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 2 Sin Detenido de la Agencia Investigadora B de la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos, en el que señaló que:

1. El 24 de noviembre de 2005, en esa Unidad de Investigación se radicó la averiguación previa FIZP/IZP-4T3/1750/05-08 contra Eduardo Parache Serna, José Luis Fernández Rosas y quienes resulten responsables, por los delitos de abuso de autoridad y tortura.

2. Se solicitó copia de la fatiga de servicio de las patrullas involucradas en los hechos, así como copia certificada de los nombramientos de los indiciados.

3. Se solicitó la comparecencia de la señora Maribel Hernández Ruiz, pero no acudió.

4. También se ha solicitado la comparecencia de los menores agraviados.

Se solicitaron los antecedentes nominales de los servidores públicos involucrados, y al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se le solicitó el original y copia fotostática del álbum fotográfico de los elementos de la Coordinación Territorial de Seguridad y Procuración de Justicia Iztapalapa 4.

2.13. Por oficio 021/AHL/06-01, el agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora B-2 Sin Detenido de la Fiscalía para Servidores Públicos, donde se tramita el desglose de las averiguaciones previas acumuladas FIZP/IZP-4T3/1750/05-08 y FIZP/IZP-4T3/1487/05-07, solicitó la colaboración de esta Comisión, a fin de que se le enviaran las fotografías tomadas por personal de este Organismo, a los menores agraviados José Luis Martínez González, Alfredo Cocino García e Ignacio Anastasio Gil, relacionados con la queja interpuesta por la señora Beatriz Elena González Reyes.

2.14. Mediante oficio 1/3185-06, esta Comisión envió al agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora B-2 Sin Detenido de la Fiscalía para Servidores Públicos, 29 fotografías que el 1 de septiembre de 2005, personal de este Organismo tomó al menor agraviado José Luis Martínez González,

en las que se aprecian las lesiones que presentaba, a fin de que se integren al desglose de las averiguaciones previas acumuladas FIZP/IZP-4T3/1750/05-08 y FIZP/IZP-4T3/1487/05-07, con la aclaración de que en la queja solamente se investigaron los hechos relativos al menor señalado. Asimismo, le solicitamos que nos enviara copia certificada, clara y legible, del desglose de las indagatorias acumuladas en cuestión.

2.15. Por oficio 057/AHL/06-03, el agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora B-2 Sin Detenido de la Fiscalía para Servidores Públicos nos envió copia certificada del desglose de las averiguaciones previas acumuladas FIZP/IZP 4T3/1750/05-08 y FIZP/IZP-4T3/1487/05-07. Del análisis de las constancias que integran dicho desglose, además de las actuaciones señaladas en el punto 8 de esta Recomendación, consta lo siguiente:

a) El 18 de enero de 2006, el menor José Luis Martínez González rindió su declaración en calidad de víctima. Narró al agente del Ministerio Público cómo fue detenido y agredido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (lo mismo que narró a personal de esta Comisión y que consta en el punto 4 de esta Recomendación), y presentó su formal denuncia de hechos que pueden constituir algún delito cometido en su agravio y en contra de quienes resulten responsables.

b) Ese mismo día, una médica certificó que el menor José Luis Martínez González presentaba tres cicatrices hipercrómicas tendiendo a desaparecer, localizadas en el borde externo del pabellón auricular, apreciándose la superior a 1.5 cm. del borde superior de la oreja, en forma circular y midiendo 0.5 cm. de diámetro, la segunda de 2 cm. del borde superior de la oreja y midiendo 0.3 cm. de diámetro, la última y más inferior localizada a 5 cm. del borde superior de la oreja, midiendo 0.5 cm. por 0.3 cm. de diámetro. En rodilla izquierda presenta cicatriz hipercrómica de forma circular que mide 15 por 1 cm. de diámetro, en su centro se aprecia cicatriz rosada perlada de aproximadamente 0.5 cm. de diámetro (refirió que las cicatrices son causa de los hechos que se investigan).

c) El 31 de enero de 2006, el agente del Ministerio Público recibió el álbum fotográfico del Sector IZP-4 Reforma en disco compacto.

d) El 1 de febrero del año en curso compareció el menor Ignacio Anastasio Gil, quien rindió su declaración en calidad de víctima. Narró al agente del Ministerio Público que:

El 26 de agosto de 2005, aproximadamente a las nueve de la noche, caminaba por el Periférico y el Eje 5 de la colonia Leyes de Reforma, en compañía de José Luis, sin recordar sus apellidos.

Llegaron unos policías, les apuntaron con sus armas de fuego y les dijeron ya chingar a su madre, uno de los policías lo sujetó del cuello y le pegó en las costillas, lo subieron a una camioneta color azul con blanco, de la cual no vio el número de placas.

También subieron a José Luis y los llevaron a una explanada, la cual no sabe dónde se encuentra. En esa explanada los policías les pegaron, les quemaron las orejas y les tomaron fotografías.

Les mostraron una metralleta y les preguntaron que de quién era. Él respondió que no sabía de quién era y los policías le dijeron que la sujetara. Él no quiso sujetar el arma, los policías le dijeron que la sujetara o si no le quemaban los cachetes, por lo que sujetó el arma y los policías le tomaron unas fotografías.

Después los volvieron a subir a la camioneta y los llevaron a la agencia IZP-4. Cuando llegaron a la agencia, también llegaron otros policías con otro joven, a quien no conoce, no podría reconocer a los policías que lo agredieron, debido a que siempre lo obligaron a tener la cara cubierta con su playera y agachado.

No obstante, el menor, al tener a la vista copias fotostáticas de las fotografías de los policías adscritos al Sector IZP-4 Reforma, reconoció plenamente y sin temor a equivocarse al policía José Luis Fernández Rosas, como el policía que lo detuvo con el apoyo de otro policía que no aparece en las fotografías, y que le decía que si le daba dinero lo dejaría libre.

El menor formuló su denuncia por hechos posiblemente constitutivos de delitos cometidos en su agravio y en contra de quienes resulten responsables.

2.16. El 22 de enero de 2007, personal de esta Comisión acudió a la Unidad Investigadora B-2 Sin Detenido de la Fiscalía para Servidores Públicos, donde constató que en el desglose de las averiguaciones previas acumuladas FIZP/IZP 4T3/1750/05-08 y FIZP/IZP-4T3/1487/05-07 se continúan realizando diligencias para su debida integración. Entre las constancias que la integran, destaca el *Dictamen médico psicológico especializado para documentar casos de posible tortura*, elaborado el 20 de diciembre de 2006 por los peritos Ángel Martínez Matías y Felipe Escobedo Uribe, médico forense y psicólogo forense, respectivamente, adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría capitalina, en el que dictaminaron lo siguiente:

DIAGNÓSTICO MÉDICO. Las cicatrices y secuelas de las lesiones encontradas referidas en el dictamen de 18 de enero de 2006 [tres cicatrices hipercrómicas tendiendo a desaparecer, localizadas en el borde externo del pabellón auricular, apreciándose la superior a 1.5 cm. del borde superior de la oreja, en forma circular y midiendo 0.5 cm. de diámetro, la segunda de 2 cm. del borde superior de la oreja y midiendo 0.3 cm. de diámetro, la última y más inferior localizada a 5 cm. del borde superior de la oreja, midiendo 0.5 cm. por 0.3 cm. de diámetro. En rodilla izquierda presenta cicatriz hipercrómica de forma circular que mide 15 por 1 cm. de diámetro, en su centro se apreció cicatriz rosada perlada de aproximadamente 0.5 cm. de diámetro. Refirió que las cicatrices son causa de los hechos que se investigan. (esta información se describe en el punto 2.15 inciso b) de esta Recomendación)], sí es factible que se hubieran producido como el ofendido refirió. José Luis Martínez González sí presentó el 26 de agosto de 2005 secuelas de lesiones físicas postraumáticas que tienen relación con los hechos denunciados.

CONCLUSIÓN PSICOLÓGICA. En estos momentos José Luis Martínez González está cursando por la etapa de desarrollo personal conocida como adolescencia; sin embargo, ante los hechos que refiere haber sufrido ha mostrado tener los elementos psicológicos como para afrontarla sin que le afecte, por lo que no muestra sintomatología derivada de los hechos que se investigan, esto es, no presenta trastornos depresivos, estrés postraumático, perturbación de la personalidad o cualquier otra secuela de tipo psicológico.

INTEGRACIÓN DE DIAGNÓSTICA MÉDICA PSICOLÓGICA:

CONCLUSIONES:

PRIMERA: Las lesiones físicas externas que presentó el menor José Luis Martínez González en región deltoidea derecha, codo derecho, cresta iliaca derecha y en ambas rodillas, referidas en los documentos médicos oficiales del 27 y 28 de agosto de 2005 y 18

de enero de 2006, por su tipo, características y ubicación anatómica, son compatibles a las producidas en la dinámica de sometimiento físico al momento de su detención policíaca.

SEGUNDA: Las secuelas de lesión en pabellón auricular derecho que presentó el menor José Luis Martínez González, referidas en los documentos oficiales del 27 y 28 de agosto de 2005 y 18 de enero de 2006, por su tipo, características y ubicación anatómica, son compatibles con alto grado de probabilidad por sus características particulares, con secuelas traumáticas delusión por quemadura de cigarro directo.

TERCERA: Por el tipo de lesión (quemadura) que presentó el menor José Luis Martínez González en pabellón auricular derecha, por sus características particulares y la forma de producción son compatibles con maniobras de tortura física. Lo anterior, pueden ser lesiones únicas o en su conjunto, aisladas o agrupadas por aplicación de un objeto o instrumento vulnerante con un fin específico.

CUARTA: Por lo tanto, en el caso del menor José Luis Martínez González mediante y durante la búsqueda, localización e identificación de secuelas, huellas o indicios de supuestas lesiones físicas producidas durante su detención, sí se encontraron lesiones que sugieren tortura. Lo anterior desde el punto de vista médico forense.

QUINTA: La versión brindada por el menor José Luis Martínez González en relación al tipo de lesiones que le fueron producidas, número de ellas, cronología, frecuencia o continuidad de realización, grado de intensidad, consecuencias, número de personas participantes, etc., son consistentes y compatibles con los indicios lesivos que en su momento fueron reportados y corroborados durante la presente evaluación médica practicada.

SEXTA: Estas lesiones no pusieron en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días.

SÉPTIMA: De acuerdo con la evaluación médica psicológica que se practicó al menor José Luis Martínez González, se establece que no se presentan ni detectan datos de estrés postraumático ni trastornos depresivos, perturbación de la personalidad o cualquier otra secuela de tipo psicológico derivados de los hechos motivo de denuncia, por el contrario, se aprecia un mejoramiento en su calidad de vida, en su comportamiento familiar, social y personal.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA GENERADA POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL CONTEXTO EN EL QUE LOS HECHOS SE PRESENTARON.

3.1 El 26 de agosto de 2005, aproximadamente a las 21:30 horas, el menor de edad José Luis Martínez González junto con otras dos personas menores de edad fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a quienes pusieron a disposición del agente del Ministerio Público en turno de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia IZP-4, quien inició la averiguación previa FIZP/IZP-4/T3/1750/05-08 contra los menores por la posible comisión de las infracciones de robo en pandilla y portación de armas prohibidas. Dicha indagatoria se inició el 27 de agosto de 2006 a las 01:12 horas, y el representante social asentó que a esa hora los menores fueron puestos a su disposición por los policías preventivos señalados; así mismo dicho servidor público acordó acumular la indagatoria en mérito a la averiguación previa IZP-4T3/1487/05-07, iniciada por el delito de robo de vehículo en agravio de Griselda Carrasco Mendel, quien identificó a uno de los menores como probable responsable de dicho delito.

3.2. El 27 de agosto de 2005, a las 00:15 horas, el médico legista adscrito a la Coordinación IZP-2, doctor José Luis Altamirano Olivares, certificó que el menor José Luis Martínez González presentaba *“...Equimosis roja en pabellón auricular derecho, equimosis rojiza de 1 centímetro en región escapular derecho, de 2 centímetros en hombro derecho, de 2 centímetros en axila derecha de 4 por 4 centímetros en pared lateral derecha de abdomen, puntiformes en cara anterior ambas rodillas, excoriaciones de 1.5 y 3 centímetros en cara posterior de antebrazo derecho, múltiples lineales en cara posterior de antebrazo izquierdo, múltiples puntiformes en cara anterior ambas rodillas. Lesiones que tardan en sanar menos de 15 días...”*

3.3. El 27 de agosto de 2005, a las 21:15 horas, la médico legista Irma Blanca de la Rosa, adscrita a la Agencia Investigadora IZP-4, certificó que José Luis Martínez González presentaba equimosis y excoriaciones en rodilla izquierda y excoriaciones en rodilla derecha y tres ampollas de 0.5 cm. en helix del pabellón auricular derecho.

3.4. En la fecha referida se tomó su declaración ministerial en la que el menor José Luis Martínez González negó los hechos que se le imputaba y refirió uno de los policías *lo obligó a agacharse y lo golpeó en la espalda y en las costillas, al tiempo que le decía que no volteara hacia arriba. Después llegó una camioneta con más policías, lo subieron a dicha camioneta y lo llevaron a una explanada, donde les tomaron fotografías al no responder al interrogatorio uno de los policías comenzó a quemarle la oreja derecha con un cigarro, le pegaron en el cuello y en las costillas mientras le volvían a preguntar de quién era la metralleta. Después le mostraron un cuchillo y le ordenaron que lo agarrara sino le iban a quemar las mejillas, por lo que tomó el cuchillo y los policías le tomaron fotografías. También lo obligaron a bajarse el pantalón y el bóxer y los policías así le tomaron fotografías.*

3.5. El 28 de agosto de 2005 fue remitido a la 57ª Agencia Investigadora Especializada en Asuntos del Menor e Incapaz y después al Comisionado de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal donde fue puesto a disposición de la Consejera Unitaria Segunda de Menores, quien el 29 de septiembre de 2005 resolvió dejarlo en libertad por considerar que no era responsable de las infracciones que se le atribuían en los expedientes 2061/2005-08 y 2062/2005-08.

3.6. El 7 de septiembre de 2005 el médico de esta Comisión, derivado de su intervención en la presente investigación y tomando en consideración las distintas constancias médicas acumuladas en la misma, así como de la entrevista y auscultación que realizó a José Luis Martínez González, concluyó que el menor sí fue sujeto a sufrimientos físicos y que el cuadro clínico que presentó el examinado sí refiere que fue sometido a quemaduras con cigarro, puñetazos, cachazos y tirado al piso, actos que el Protocolo de Estambul considera como métodos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3.7. El 25 de octubre de 2005, el agente del Ministerio Público Responsable de la Unidad de Investigación 2 sin detenido de la Coordinación Territorial IZP-4 respecto del desglose de la indagatoria FIZP/IZO-4/T3/1750/05-08, resolvió proponer el no ejercicio de la acción penal en los términos señalados en el punto 2.11 inciso d.10 de esta Recomendación.

3.8. El 24 de noviembre de 2005, en la Unidad de Investigación B-2 sin detenido de la Fiscalía para Servidores Públicos se radicaron las averiguaciones previas acumuladas FIZP/IZP-4T3/1750/05-08 y FIZP/IZP-4T3/1487/05-07 contra Eduardo Parache Serna y José Luis Fernández Rosas, policías preventivos adscritos al Sector 42 Reforma IZP-4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por los delitos de abuso de autoridad y tortura cometidos en agravio del menor José Luis Martínez González.

3.9. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se presume que los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal conculcaron en perjuicio del menor José Luis Martínez González el derecho humano a la integridad física.

3.10. La actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal atentó contra uno de los derechos humanos más importantes para toda persona y que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar su vigencia con mayor vehemencia: el derecho a la integridad personal. En efecto, de forma injusta, arbitraria e ilegal se atentó contra la integridad psicofísica de una persona menor de edad por el hecho de negarse a responder los cuestionamientos que sobre objetos de una presunta conducta ilícita le realizaron los policías preventivos aprehensores, quienes pretendían atribuir al agraviado José Luis Martínez González y a las otras personas menores de edad que fueron detenidos la comisión de un ilícito. Esta conducta es reprochable más aún tratándose de servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, de velar por el orden y la seguridad jurídica de los ciudadanos y por el respeto de los derechos humanos. Todo indica que estos servidores públicos sometieron al menor de edad e hicieron que se desnudara y en este estado le tomaron fotografías, lo golpearon y quemaron con cigarro el pabellón de la oreja derecha.

4. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN QUE SOPORTA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.

4.1. Esta Comisión sustenta la investigación de casos de tortura, como el que se expone en este documento, sobre los lineamientos establecidos en el Manual para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, "Protocolo de Estambul", el cual contiene reglas mínimas que permiten un eficaz diagnóstico de la tortura. Cabe señalar que el procedimiento de investigación establecido en el Protocolo de Estambul ha sido reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un instrumento invaluable para la prevención de la tortura, y protección del derecho a la integridad personal.

4.2. En México están vigentes diversos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que prohíben la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en ellos se establece que cualquier servidor público que incurra en ella será enérgicamente sancionado.

4.3. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Artículo 16. ...La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Artículo 19. ...Todo maltrato en la aprehensión... son abusos, que serán corregidos por las leyes.

Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado... tendrá las siguientes garantías:

A. Del inculpado: ...

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura...

Artículo 22. Quedan prohibidas... el tormento de cualquier especie...

A pesar de que este artículo es contundente al señalar las penas que están prohibidas en México, no especifica tácitamente que una de esas prohibiciones es la tortura; sin embargo, en la actualidad podemos interpretar que al señalar la prohibición del tormento,

se refiere precisamente a la prohibición de la tortura, lo cual corresponde a una situación jurídica ya superada en el ámbito formal.

4.4. Tanto el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981—, como el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos —adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948—, establecen:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

4.5. La Declaración Sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1975— dispone que:

Artículo 1.1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras....

Artículo 2. Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos...

Artículo 3. Ningún Estado permitirá o tolerará la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales...o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

4.6. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura —que entró en vigor en México el 22 de junio de 1987— establece que

Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psíquica...

Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura: a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 8. ...Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal...

4.7. El Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión —adoptado por la ONU el 9 de diciembre de 1988— señala que:

Principio 6. Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física psíquica y moral.

Artículo 5.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles...

4.8. El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley —adoptado por la ONU el 17 de diciembre de 1979— señala que:

Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.

Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...

Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.

4.9. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que:

Artículo 47. Todo Servidor Público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respecto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de ésta.

XXIV. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

4.10. El Código Penal para el Distrito Federal señala:

Artículo 294. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público del Distrito Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de:

I. Obtener de ella o de un tercero información o una confesión;

II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o

III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así como al particular que, instigado autorizado por un servidor público, cometa tortura.

Artículo 295. Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica.

4.11. También dentro de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos se encuentran los Informes y Recomendaciones que con motivo de las visitas de observación han realizado diversos Organismos y mecanismos Internacionales a nuestro país, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, según la Carta de la Organización de los Estados Americanos, es un órgano cuya función primordial es promover observancia y defensa de los derechos humanos.

4.12. Bajo este contexto, el informe de 1998 sobre la visita in loco sobre la Situación General de los Derechos Humanos en México, la Comisión Interamericana, en relación con la tortura, hizo las siguientes observaciones al Estado Mexicano:

294... México ha ratificado instrumentos específicos en materia de tortura como son la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. A través de ambos instrumentos, México se obligó internacionalmente, entre otras cosas, a prevenir y sancionar la tortura y a tomar todas las medidas legislativas,

administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedirla dentro de su jurisdicción.

4.13. En dicho informe también señaló la importancia de profesionalizar la tarea de los servidores públicos a cargo de la investigación de los delitos:

385. Otra de las críticas que se le hace al Ministerio Público en México, es relativa a las características del personal y sus condiciones de trabajo. En este sentido, se ha señalado que:

...a pesar de los requisitos que les son exigidos a los funcionarios para ocupar los cargos, lo cierto es que su preparación no es la adecuada. La combinación de una falta de conocimiento profundo del ordenamiento jurídico vigente y la desidia en el trabajo imposibilitan que el rendimiento sea, en términos generales, satisfactorio.

La falta de un sistema de control adecuado favorece que los asuntos se resuelvan a partir de una especie de conocimiento práctico, de manera automática, sin considerar las particularidades de cada caso, lo que termina burocratizando el trabajo. Esta burocratización tiene mucho que ver con la sobrecarga de trabajo, que impide que los agentes se involucren en los asuntos que atienden y, por lo tanto, inhibe su interés investigador.

390. En opinión de la CIDH, buena parte del problema radica en la formación tan precaria de los agentes de la Policía Judicial, muchos de ellos no han terminado la preparatoria, y en términos generales, la preparación es superficial y escasamente enfocada a lo que es su función básica: la investigación y persecución de los delitos.

La falta de una buena formación, además de que les impide tener una idea clara de la importancia de la legalidad, los hace sentirse incompetentes para actuar dentro de ella. La costumbre de trabajar de una determinada manera, sin control sobre los abusos que puedan cometer, ha creado vicios difíciles de erradicar. (115)

4.14. En relación con lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló al estado Mexicano las siguientes Recomendaciones:

716. Que otorgue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales respectivas, el apoyo necesario para que sigan vigilando y denunciando los hechos de tortura ante las autoridades correspondientes; y que adopte las medidas necesarias para que las recomendaciones de dichas Comisiones sean cumplidas.

717. Que adopte las medidas necesarias para asegurar que los hechos de tortura sean calificados y sancionados como tales por los órganos jurisdiccionales competentes, acorde con la definición internacional de dicha violación al derecho a la integridad personal.

718. Que adopte las medidas necesarias para ejercer una efectiva supervisión judicial de la detención y de los órganos encargados de ejecutarla, dado que la fase de arresto y detención es una de las más críticas de todo proceso, en la cual el detenido queda bajo control exclusivo de la policía.

720. Que adopte iniciativas concretas para educar y formar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sobre la prohibición absoluta de los actos de tortura, o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

725. Que investigue y sancione a los responsables de hechos de tortura.

4.15. Del análisis lógico-jurídico realizado a las constancias y evidencias del presente caso así como todos y cada uno de los instrumentos internacionales, ordenamientos legales e informes especiales señalados, esta Comisión llega a la convicción de que los policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que participaron en la detención y presentación del menor José Luis Martínez González, no respetaron su integridad física, psíquica y moral, por lo que es categórico que su conducta constituye un acto de tortura.

4.16. De las evidencias recabadas se desprende que el menor José Luis Martínez González fue víctima de actos de tortura por parte de los policías preventivos Eduardo Parache Serna, José Luis Fernández Rosas, David García Reyes y Oswaldo Godínes Sánchez adscritos al Sector Reforma IZP-4.

4.17. Según consta en la narración que José Luis Martínez González hizo a esta Comisión, desde el momento de su detención, y sin mediar motivo alguno, el menor fue agredido física y verbalmente por los policías preventivos señalados, y antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público, le tomaron unas fotografías y continuaron con las agresiones, al grado de quemarle el pabellón de la oreja derecha con un cigarro.

4.18. Sin embargo, en el informe que esa Secretaría de Seguridad Pública envió a esta Comisión, los policías preventivos José Luis Fernández Rosas y Eduardo Parache Serna, señalaron que al perseguir a los detenidos, entre ellos, al agraviado José Luis Martínez González, efectuaron una detención limpia de contacto físico, precisando que los detenidos fueron cooperativos, y que los cuatro policías que procedieron al aseguramiento (ellos dos y los también policías preventivos David García Reyes y Oswaldo Godínes Sánchez, quienes tripulaban la misma patrulla) lo iniciaron con el cacheo preventivo a pie; sin embargo, en ningún momento precisaron a qué se referían con la detención limpia de contacto físico, la cual, por cierto, de ninguna manera se trató de una detención limpia, ya que antes de poner a José Luis Martínez González a disposición del Ministerio Público, lo torturaron (con golpes, agresiones físicas y verbales y con quemaduras de cigarro), lo cual quedó debidamente certificado por el médico legista de la agencia del Ministerio Público IZP-4 cuando lo revisó a su ingreso a dicha agencia.

4.19. Aunque de la información proporcionada por esa Secretaría de Seguridad Pública se desprende que los policías que participaron en la detención del menor agraviado y que, por obvias razones, fueron los responsables de las agresiones de que dicho menor fue víctima, son los policías preventivos Eduardo Parache Serna, José Luis Fernández Rosas, David García Reyes y Oswaldo Godínes Sánchez, en las constancias que integran la averiguación previa IZP-4T3/1750/05-08 se desprende que solamente los dos primeros fueron los que pusieron a José Luis González Martínez a disposición del agente del Ministerio Público, y al rendir su declaración ministerial solamente refirieron que los detenidos, entre ellos el agraviado, al notar su presencia comenzaron a correr, por lo que los persiguieron y lograron asegurarlos, y que dichos detenidos fueron identificados por una persona como los responsables de haberle robado un vehículo, pero en ningún momento hicieron alguna referencia sobre el origen de las lesiones que presentaba José Luis Martínez González, lesiones que fueron certificadas por el médico legista adscrito a la agencia del Ministerio Público.

4.20. Fue hasta que el menor José Luis Martínez Gonzáles rindió su declaración en presencia de su padre (a quien nombró persona de su confianza), que éste señaló que las lesiones que presentaba le fueron ocasionadas por los policías preventivos que lo detuvieron y también narró cómo le fueron ocasionadas: por golpes y quemadura de cigarro. Aunque dicho menor, en ese momento, se reservó su derecho a formular una denuncia contra sus agresores.

4.21. Tanto el menor agraviado como la indagatoria fueron remitidas a la 57ª Agencia Especializada en Asuntos del Menor e Incapaz para que resolvieran la situación jurídica de aquel. En esta Agencia Especializada, se determinó enviar a José Luis González Martínez y a la indagatoria al Comisionado en turno de la Dirección General de Menores, y aún cuando en ese momento el agraviado se reservó su derecho a formular alguna denuncia por las lesiones que presentaba, también se determinó enviar un desglose de dicha indagatoria a la Fiscalía para Servidores Públicos, a fin de que se realizara la investigación correspondiente por dicho hechos.

4.22. Como ya se señaló, dicho desglose se radicó en la Unidad de Investigación B-2 de la Fiscalía aludida, donde se continúa la investigación por los delitos de tortura y abuso de autoridad cometidos en agravio de José Luis Martínez González.

4.23. El médico de esta Comisión fue contundente al señalar que las lesiones que presentaba el menor José Luis Martínez González en diversas partes del cuerpo fueron producidas por patadas y puñetazos, y las que presentaba en el oído derecho fueron ocasionadas por quemaduras de cigarro, lesiones que además de haber sido certificadas por el médico de esta Comisión, también lo fueron por los médicos legistas adscritos a las agencias del Ministerio Público IZP-4 y 57ª Especializada en Asuntos del Menor e Incapaz, así como por el perito adscrito a la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores cuando el agraviado fue puesto a disposición del Consejero en turno de dicha Dirección General.

4.24. Como ya se ha mencionado, en el parte de novedades que los policías preventivos aludidos rindieron a su superior, solamente señalaron que cuando realizaban un operativo, presuntamente los detenidos comenzaron a correr al notar su presencia, por lo que los persiguieron y lograron asegurarlos y al revisarlos les encontraron algunas armas punzocortantes. También señalaron que posteriormente investigando sobre el robo de un vehículo que ocurrió un mes antes por esa zona, acudieron al domicilio de la denunciante, quien identificó a los detenidos como los responsables del robo de su vehículo; fue entonces cuando los policías remitieron a los detenidos ante el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial IZP-4. Sin embargo, a pesar de que al poner al menor José Luis Martínez González a disposición presentaba lesiones (algunas provocadas por quemadura de cigarro), nunca señalaron el origen y los detalles de las mismas; tampoco explicaron si fue necesario hacer uso de la fuerza para someterlo y mucho menos el tipo de investigación que llevaron a cabo para relacionarlo con el robo del vehículo señalado. Simplemente intentaron que pasara inadvertido ese hecho, con la convicción de que José Luis Martínez González, ante las severas agresiones que recibió, no los denunciaría.

4.25. De la descripción —en cuanto a su dimensión y ubicación— de las lesiones presentadas por el menor José Luis Martínez González en los informes médicos que ya se han señalado en el capítulo II de esta Recomendación, la mayoría no corresponden a las lesiones típicas o características de sometimiento, en caso de que los policías hubieran justificado su acción argumentando que fue necesario hacer uso de la fuerza. Mucho menos las que el menor presentaba en el pabellón de la oreja derecha, ya que estas fueron provocadas por quemadura de cigarro.

4.26. Asimismo, de la narración del agraviado se desprende que las lesiones no le fueron inferidas para someterlo, ya que en ningún momento opuso resistencia para ser detenido, se trataba de una persona menor de edad, fueron cuatro los policías preventivos que participaron en su detención y existe nula probabilidad de que se hubiera opuesto o resistido a la fuerza de cuatro personas. No obstante que los

policías eran mayor en número, y que evidentemente no había manera de enfrentarse a ellos, los policías ilegalmente le profirieron golpes, agresiones verbales y amenazas, realizando un uso excesivo de la fuerza, sin que hubiera algún motivo o evento que justificara la aplicación de ella, simplemente porque sobrepasaban en número al agraviado y los otros dos detenidos, y porque se trataba de una persona menor de edad. No conformes con los golpes que le propinaron al menor, una vez que ya estaba asegurado y bajo su resguardo, los policías aprovecharon esta situación, y torturaron a José Luis Martínez González, quemándole el pabellón de la oreja derecha.

4.27. En este sentido, el médico de esta Comisión —de acuerdo al análisis realizado con base en los lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul— concluyó que las lesiones que el menor José Luis Martínez González presentaba sí coinciden con la forma en que dice que le fueron ocasionadas el menor agraviado.

4.28. Asimismo, las evidencias fotográficas recabadas por esta Comisión evidencian un acto de tortura atribuible a los policías preventivos que llevaron a cabo la detención del menor José Luis Martínez González y haberlo entregado al agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial IZP-4.

4.29. Otro elemento por el que esta Comisión llega a la firme convicción de que José Luis Martínez González fue torturado al momento de su detención y cuando se encontraba bajo el resguardo de los policías preventivos que lo detuvieron, antes de ser presentado ante el agente del Ministerio Público, es el exceso de tiempo transcurrido entre su aseguramiento y su puesta a disposición, ya que de las constancias que integran la averiguación previa IZP-4T3/1750/05-08 se desprende que la detención del agraviado se llevó a cabo aproximadamente a las 21:30 horas del 26 de agosto de 2005, pero el agente del Ministerio Público del tercer turno de la Coordinación Territorial IZP-4 radicó dicha indagatoria a las 01:12 horas del 27 de agosto del mismo año, con la puesta a disposición de los detenidos, entre ellos José Luis Martínez González.

4.30. Los policías preventivos en ningún momento señalaron lo ocurrido después de haber detenido a José Luis Martínez González; sin embargo, éste asegura que antes de ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público, lo llevaron a una explanada, donde continuaron torturándolo, y fue precisamente en ese lugar donde le quemaron el pabellón de la oreja derecha con un cigarro.

4.31. Es importante destacar que en su informe, los policías preventivos en ningún momento mencionan el tipo de investigación que llevaron a cabo para localizar a la propietaria del vehículo que un mes antes le había sido robado por la zona donde aseguraron a los detenidos, entre ellos al menor José Luis Martínez González, y tampoco dónde estuvieron los detenidos durante ese tiempo, entre ellos el menor señalado, y si éste, al momento de detenerlo, ya estaba lesionado o si sabían el origen de sus lesiones. Los policías simplemente intentaron que pasara inadvertida esa situación, lo cual era imposible porque las lesiones que le provocaron al menor José Luis Martínez González eran evidentes y en zonas detectables a simple vista.

4.32. Es evidente que el tiempo que los detenidos, entre ellos el menor José Luis Martínez González, permanecieron a merced de los policías aprehensores, fue tiempo suficiente para martirizarlo y atentar contra su integridad física y emocional.

4.33. Al respecto, el menor agraviado dio un relato detallado de lo que sucedió en ese tiempo. Del relato se desprende que, en ese tiempo, los policías preventivos lo torturaron al quemarle el pabellón de un oído con un cigarro, antes de ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público.

4.34. El motivo por el cual presuntamente los policías preventivos detuvieron al menor José Luis Martínez González fue porque cuando el menor se percató de su presencia supuestamente intentó huir,

pero al alcanzarlo le encontraron un arma punzocortante, y después de que presuntamente realizaron una investigación, localizaron a la propietaria de un vehículo que un mes antes le había sido robado en esa zona, quien identificó al menor detenido como una de las personas que le había robado su vehículo; sin embargo, en ningún momento aclararon el tipo de investigación que llevaron a cabo, cómo fue que se enteraron del robo del vehículo y tampoco cómo recabaron la información para localizar a la propietaria del mismo.

4.35. Independientemente de que efectivamente el menor José Luis Martínez González al ser capturado portara un arma punzo cortante y hubiera participado en el robo de un vehículo, este hecho no justifica que los policías preventivos se excedieran en sus funciones y lo torturaran. La tortura en ningún caso y bajo ningún supuesto es permisible, ni en éste ni en los delitos más graves así calificados por la Ley.

4.36. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entró en vigor en México el 23 de septiembre de 1987 y define la tortura como: *todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin...*

4.37. Es evidente que en este caso, los sufrimientos físicos y mentales causados al menor José Luis Martínez González se realizaron con la finalidad de intimidarlo y como castigo personal, además, para que se declara culpable de la infracción que se le atribuía.

4.38. La prevención del delito, y la procuración e impartición de justicia deben profesionalizarse en su conjunto, para lograr que la probable responsabilidad de una persona sea obtenida con investigaciones eficaces y científicas, y no a través de la práctica de actos tan reprobables como la tortura. Además, conforme a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, sus elementos no están facultados para realizar investigaciones de delitos por *motu proprio*, a menos que obre una solicitud expresa de una persona, situación que no ocurrió en el presente caso.

4.39. Los casos de tortura suelen ocurrir en un supuesto de uso irracional de la fuerza, ya sea que se trate de una circunstancia excepcional o de un contexto de práctica reiterada. En este caso, los actos que culminaron en la tortura del menor José Luis Martínez González, ocurren en un contexto en el cual el uso irracional de la fuerza pública se ha manifestado por el maltrato, los golpes excesivos, las vejaciones, insultos e intimidaciones por parte de servidores públicos autorizados para hacer cumplir la ley.

4.40. Si bien es cierto, en el caso que se analiza la conducta típica de los policías que torturaron a José Luis Martínez González conlleva el uso irracional de la fuerza, es relevante destacar una vez más que una práctica reiterada al margen de criterios básicos de uso gradual de medios coercitivos y excepcional de armas no letales, así como excepcionalísimo de armas letales, empieza por la práctica de detención fuera de los casos que autoriza la Constitución, seguida de maltrato. En estos casos, servidores públicos tomaron la decisión de reprender, sancionar o castigar por su cuenta, fuera de los casos de sometimiento o de uso legítimo de la fuerza por oposición a la detención, o por legítima defensa, propia o de un tercero.

Debe tomarse en consideración que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley tienen la calidad de garante de la seguridad de los habitantes, con motivo de sus propios actos de autoridad y que por ello, el análisis de los hechos nos obliga a considerar las circunstancias en las cuales los policías implicados decidieron hacer un uso indebido y totalmente desproporcionado de la fuerza contra el agraviado.

Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, disponen en su artículo cuarto, que estos funcionarios en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza, y podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

En cualquier caso, únicamente podrá ejercerse un uso de la fuerza cuando sea estrictamente inevitable, y después de haber agotado mecanismos no violentos para persuadir a la persona que vaya a detener por ser responsable de un ilícito, de que permita que se lleve a cabo la detención, o bien, someterlo, pero sin hacer un uso excesivo de la fuerza.

En este mismo sentido queda establecido en el artículo tercero del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Así mismo, dicho Código establece en su artículo segundo, la obligación de respetar y proteger la dignidad humana, mantener y defender los derechos humanos de todas las personas.

4.41. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006 reafirma la necesidad de construir un estado democrático de derecho y reformar el gobierno para eliminar la arbitrariedad, teniendo como condición básica para la democracia el ejercicio pleno de las garantías individuales, por lo cual se propone lograr la meta de tortura cero. En dicho programa se señala que:

En el combate al delito y a la inseguridad, el nuevo gobierno será escrupulosamente respetuoso de los derechos humanos, ya que ni la democracia ni el estado de derecho tienen sentido si las autoridades no respetan los derechos elementales reconocidos universalmente como inherentes a la persona.

Especialmente se pretende lograr la meta de "tortura cero" para lo cual serán sancionados con severidad quienes, en alguna de las corporaciones policíacas o agencias persecutorias del delito, pretenda mantener esa práctica.

Se equiparan a las torturas físicas los malos tratos, la incomunicación, las injurias graves, las amenazas abiertas o veladas a los detenidos y sus familiares, todo lo cual será sustituido por las prácticas, ya instrumentadas por el gobierno anterior, de investigación científica y técnica que se profundizarán y ampliarán en esta nueva administración.

La delincuencia y la inseguridad no nacen por generación espontánea; aparecen en la Ciudad como resultado de la convergencia de muchas causas: unas crónicas, instaladas en la infraestructura misma de la sociedad, y otras temporales y circunstanciales, que varían de lugar y tiempo. Muy importante en ese sentido es la añeja cultura de complicidad y de impunidad, y más recientemente, un clima general propicio para el crimen y el desorden. Los factores que crean el clima de inseguridad son de carácter económico o de naturaleza social y cultural: la inseguridad en la distribución de la riqueza, el incremento de los índices de pobreza y pobreza extrema así como el desempleo y la alta rentabilidad del delito.

4.42. Lo anterior implica que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal debe realizar e implementar programas y acciones concretas para transmitir a su personal la efectividad de la meta tortura cero. Esto, a su vez, conlleva los esfuerzos para lograr la profundización, ampliación y plena eficacia de prácticas de investigación científica y técnica, para lo cual se debe prestar especial atención a los puntos conducentes de las Recomendaciones 3/02, 5/02, 5/03 y 1/04.

4.43. Con la información recabada por parte de esta Comisión, y las evidencias contenidas en el propio expediente se llegó a la conclusión de la existencia de actos de tortura contra el menor agraviado, pues se debe tomar en cuenta lo sostenido por el Relator Especial Contra la Tortura en el sentido de que ésta se practica casi invariablemente en privado y se practica con más frecuencia durante la incomunicación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en los casos de violación a los derechos humanos, a diferencia del derecho penal, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de alegar pruebas que en muchos casos no pueden obtenerse sin la colaboración del Estado quien tiene las pruebas bajo su control o disposición.

5. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE REPARAR EL DAÑO OCASIONADO POR LA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS.

5.1. Habiendo quedado acreditada la violación al derecho a la integridad personal por parte de Policías Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal esta Comisión procede a determinar los parámetros que servirán de base para la reparación del daño ocasionado.

5.2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que:

Artículo 1.-

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social

5.3. En este sentido, el Estado tiene la obligación de cumplir con la reparación del daño a las víctimas por violaciones a los derechos humanos cometidas por parte sus servidores públicos, en virtud de que una de sus obligaciones es respetar y hacer respetar los derechos de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.

5.4. Los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que:

En términos de lo previsto por el artículo 63.1 de la citada Convención, el Estado tiene la obligación de reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En el caso que se actúa, dicha reparación y/o indemnización debe realizarse a favor del menor agraviado y/o de sus familiares.

5.5. Cabe destacar que en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha establecido que una de las formas de reparar el daño ocasionado, es mediante la investigación y sanción de los servidores públicos que de una u otra manera contribuyeron para que se diera la violación o que ésta continuara. Al respecto, la Corte ha establecido:

61. Respecto a la continuación del proceso para la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, esa es una obligación que corresponde al Estado

siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad.

5.6. Para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la citada Corte, no es suficiente que el Estado emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario además, que toda esta actividad del Estado culmine con la justa indemnización a la parte lesionada, y que exista una efectiva restitución del derecho humano violado.

5.7. Por su parte nuestra Legislación Nacional prevé el pago de la reparación de daño en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1910, 1915 y 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 17 fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 46 de la Ley de este Organismo, 389 y 390 fracción II del Código Financiero del Distrito Federal.

5.7. La indemnización constituye la forma más usual de reparar el daño, que incluye el pago de una indemnización como compensación a los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral.

5.8. Daños materiales

Siendo que las afectaciones a derechos humanos tienen una connotación distinta a lo que representa un riesgo de trabajo y debido a que en este caso las afectaciones fueron provocadas por la autoridad, quien tiene el deber jurídico de tutelar a los individuos, y dichas afectaciones fueron ocasionadas con la característica de la intencionalidad (dolo); por ello, para la debida cuantificación del daño debemos de considerar dos factores específicos:

Al respecto, citamos la siguiente tesis:

DAÑO POR RESPONSABILIDAD CIVIL, REPARACIÓN DEL. EN QUÉ CONSISTE. Al establecer el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, que cuando el daño que se cause a las personas produzca algún tipo de incapacidad, el grado de la reparación debe determinarse atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, es obvio que tal reparación no se limita a la indemnización en dinero que el propio precepto establece, sino atender además lo que al respecto contempla la ley laboral, de acuerdo con el numeral en cita. De esta manera, si en dicha legislación se establece que además de la indemnización que les corresponda, los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tienen derecho, entre otras cuestiones, a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación y hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación y aparatos de prótesis y ortopedia necesarios, es inconcuso que al actualizarse una hipótesis de daño que produzca incapacidad, la autoridad de instancia, a fin de determinar en qué debe consistir la reparación del daño causado, debe tomar en consideración lo que al respecto señala la ley laboral y condenar al causante a la reparación que le corresponda, según el grado del daño que se le hubiere causado, independientemente de la indemnización pecuniaria que le corresponda.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3235/2001. Erick Edgar Pineda Jaramillo. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Luis Alberto Ibarra Navarrete.

5.9. Daño moral:

Con motivo de los hechos violatorios a sus derechos humanos evidentemente se causaron daños en la esfera moral y psicológica de las víctimas, los cuales también deben ser reparados integralmente; al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo siguiente:

“El daño moral a la víctima resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes experimenta un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión”.

Por su parte, el Código Civil del Distrito Federal en su artículo 1916 establece que por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, además se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe la integridad física o psíquica de las personas, como ocurrió en el caso del menor José Luis Martínez González

Las afectaciones en la esfera moral y psicológica son consecuencia directa de los hechos de agresión en contra del menor José Luis Martínez González. Además, son claros los hechos de tortura demostrados en el cuerpo de esta recomendación provocándose intimidaciones tanto físicas como de carácter moral y psicológico.

Por lo anterior, se estima procedente que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal como reparación integral del daño moral, deberá de otorgar:

1) Como medida de *rehabilitación*, previo consentimiento informado, se realice al agraviado dictamen psicológico, a fin de detectar las afectaciones en esta esfera derivadas de los hechos de agresión e intimidación, para que de ser el caso y ser su voluntad, se le brinde la atención psicológica que requiera.

2) Como medida *compensatoria*, la inclusión del menor y/o sus familiares en algún programa de asistencia social

5.10. Además se estima procedente que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal otorgue una indemnización al agraviado en términos de la Ley Federal del Trabajo, en el pago de los gastos médicos erogados, previa comprobación por parte del agraviado y/o sus familiares ante la autoridad.

5.11. Que esa Secretaría dé inicio a las investigaciones conducentes a efecto de que el órgano de control interno competente, deslinde la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en los actos de tortura que se mencionan, y que evite en lo futuro, que se repitan actos violatorios de derechos humanos como el del presente caso, lo anterior de conformidad con el artículo 47, 77Bis y demás aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN PARA EMITIR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

Independientemente del fundamento sustantivo que ha quedado detallado en el apartado 4 de esta Recomendación, son aplicables los siguientes artículos: 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 11, 17 fracciones I, II y IV, 22 fracción IX, 24 fracción IV, 45,

46, 47, 48 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como 2°, 5°, 7°, 10, 11, 16 fracción I, 19, 50 fracción IX, 73 fracción IX, 95, 96, 97, 98, 99, 100 a 105 y 136 a 146 de su Reglamento Interno, por lo que se concluye la investigación de la queja conforme a los puntos de la siguiente:

RECOMENDACIÓN

PRIMERO: Que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en el ámbito de su competencia dé vista a la Unidad de Asuntos Internos y al H. Consejo de Honor y Justicia de esa Secretaría, con los argumentos y pruebas que sirvieron a esta Comisión como medios de convicción para la emisión de la presente Recomendación, a fin de que se investigue y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra los policías preventivos Eduardo Parache Serna, José Luis Fernández Rosas, David García Reyes y Oswaldo Godínes Sánchez adscritos al Sector Reforma IZP-4, quienes participaron en la detención del menor José Luis Martínez González y cometieron actos de tortura en su agravio.

SEGUNDO. Se coadyuve activa y eficazmente con el agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora B-2 sin detenido de la Fiscalía para Servidores Públicos, quien tiene a su cargo la integración del desglose de las averiguaciones previas acumuladas FIZP/IZP-4T3/1750/05-08 y FIZP/IZP-4T3/1487/05-07 que se elaboró con motivo de las lesiones que presentó el menor José Luis Martínez González. Se proporcione oportunamente a dicho agente del Ministerio Público la información y apoyo que se requiera, incluyendo lo actuado e investigado por esta Comisión, para que, en su caso, determine la responsabilidad penal en que pudieron incurrir los servidores públicos involucrados.

TERCERO: Que se proceda a la reparación de los daños causados al agraviado, en los términos descritos en el Apartado 5 de la presente Recomendación, que comprende:

1) Como medida de *rehabilitación*, previo consentimiento informado, se realice al agraviado dictamen psicológico, a fin de detectar las afectaciones que derivaron de los hechos de agresión e intimidación, para que de ser el caso y ser su voluntad, se le brinde la atención psicológica que requiera.

2) Como medidas *compensatorias*:

a) La inclusión del menor y/o sus familiares en algún programa de asistencia social.

b) Se incluya al menor agraviado José Luis Martínez González en un programa de becas, hasta que concluya sus estudios profesionales.

c) En caso de resolver la responsabilidad de los elementos que torturaron a José Luis Martínez González, se haga del conocimiento de todo el personal que labora al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los incidentes del presente caso y la sanción que se impuso a los elementos, a efecto de enviar un mensaje a todo el personal que labora en esa Dependencia, de que los actos de tortura serán sancionados y que la Secretaría no permitirá la impunidad de sus elementos.

3) Como indemnización, el pago de gastos médicos erogados, que se efectuaron para la atención médica de las lesiones de que fue objeto, previa comprobación por parte del agraviado y/o sus familiares ante la autoridad competente.

4) Se dé inicio a las investigaciones conducentes a efecto de que el órgano de control interno competente, deslinde la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en los actos de

tortura que se mencionan, y que evite en lo futuro, que se repitan actos violatorios de derechos humanos como el descrito en el presente caso, lo anterior de conformidad con el artículo 47, 77 Bis y demás aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

CUARTO: Revisar las políticas de los estímulos económicos que se otorgan a los policías por la detención de personas (someterlos a la auditoria de una instancia académica como la UNAM, UAM o UACM), a efecto de dilucidar si esta política ocasiona que los policías fabriquen delitos, y la posibilidad de otorgar dichos incentivos hasta que la autoridad jurisdiccional dicte el auto de plazo constitucional en el que se determine la sujeción a proceso de la persona que fue detenida, o en su caso, hasta que el Consejo Unitario de Menores defina la situación jurídica del menor.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 142 de su Reglamento Interno, se le hace saber al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique esta Recomendación, en el entendido de que de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que acepte la misma, se le notifica que dispondrá de un plazo de 10 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento, las cuales deberán ser remitidas a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de esta Comisión, que con fundamento en los artículos 144 y 145 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es el área responsable de calificar las Recomendaciones de acuerdo a su aceptación y cumplimiento.

Así lo determina y firma:

MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL